

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa" lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José María Cordero.—Adolfo Suárez.—Enrique Medina.—Manuel Gordillo.—Jerónimo Arozamena. (Rubricados).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario, Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

13989 *ORDEN de 27 de abril de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Elicio Ferraz Cano.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 22 de septiembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Elicio Ferraz Cano,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Elicio Ferraz Cano contra resolución de la Dirección General de Trabajo de veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y nueve, sobre plus de distancia, debemos declarar y declaramos no ser ajustada a derecho y en consecuencia la declaramos radicalmente nula así como la del Delegado de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife de veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho revocada por aquélla, como dictadas ambas con incompetencia manifiesta de la Administración en materia que correspondía a la Jurisdicción del Trabajo; sin mención expresa de las costas del proceso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Adolfo Suárez. Aurelio Botella.—Paulino Martín.—Jerónimo Arozamena.—José Gabaldón.—Rubricados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario, A. Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

13990 *ORDEN de 30 de abril de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por doña Ana Álvarez-Arenas Molina y otros.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 19 de diciembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por doña Ana Álvarez-Arenas Molina y otros,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad alegadas, desestimamos el recurso interpuesto por doña Ana Álvarez-Arenas Molina, don Francisco Anera Fernández, don Manuel González Ríos, don Ramón Granadino Jiménez, don Emilio Guerra Ortiz, don Antonio Iglesias de los Ríos Zarzosa, don Antonio López García, don Manuel María Morales Montero, don Salvador Peláez Tortosa, don Antonio Peragón Lorenzo, don Manuel Salido García, don Juan de Dios Serrano Serrano y don Angel Torres Ortega, contra la Orden del Ministerio de Trabajo de veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y dos, y resolución del mismo Departamento de diecisiete de junio de mil novecientos setenta y dos, que interpretaron el artículo sesenta y nueve del Estatuto de Funcionarios del Instituto Nacional de Previsión de treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta, declarando que dichas disposiciones son conformes a derecho, absolviendo de la demanda a la Administración, sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan V. Barquero.—Victor Serván.—Antonio Agúndez.—Adolfo Carretero.—Miguel de Páramo.—Rubricados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario, Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

13991 *ORDEN de 3 de mayo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don José Luis Muñoz Ramos.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de enero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don José Luis Muñoz Ramos.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad, propuesta por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la Administración, de este recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis Muñoz Ramos, funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado, sin entrar, en consecuencia, en el examen del fondo del recurso, ni hacer expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan V. Barquero.—Victor Serván.—Antonio Agúndez.—Adolfo Carretero.—Miguel de Páramo.—Rubricados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de mayo de 1976.—P. D., el Subsecretario, Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

13992 *ORDEN de 1 de julio de 1976 por la que se establecen indemnizaciones por residencia para el personal que presta sus servicios en Canarias en los Bancos Oficiales.*

Ilmos. Sres.: Por coincidir en el personal de la Banca Oficial que presta sus servicios en Canarias las mismas circunstancias que fueron tenidas en cuenta en la Orden de 28 de noviembre de 1956, que concedió indemnización de residencia en dichas plazas al personal de la Banca privada, indemnización que, por un criterio de analogía, se hizo extensiva al Banco de España y al Banco Exterior de España,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están conferidas, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se establece una indemnización por residencia al personal que preste sus servicios en Canarias, en los Bancos Oficiales que a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición no la tuvieran, concedida por la Ordenanza Laboral o Convenio Colectivo.

Art. 2.º La cuantía de dicha indemnización no podrá ser inferior al 50 por 100 de los sueldos y premios de antigüedad mínimos reglamentarios.

Art. 3.º Lo dispuesto en la presente Orden ministerial producirá efectos económicos desde el día 1 de julio de 1976.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a VV. II.
Madrid, 1 de julio de 1976.

SOLIS

Ilmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Director general de Trabajo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

13993 *REAL DECRETO 1657/1976, de 21 de mayo, de otorgamiento a «CAMPSA», «CIEPSA» y «COPAREX» de un permiso de investigación de hidrocarburos situado en la zona A.*

Vista la solicitud presentada por las Sociedades «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA), en su calidad de administradora del monopolio de petróleo; «Compañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima» (CIEPSA), y «COPAREX Española, S. A.» (COPAREX), para la adjudicación de un permiso de investigación de hidrocarburos, situado en la zona A, denominado «Santurde», y teniendo en cuenta que: las solicitantes poseen la capacidad técnica y financiera necesaria; que proponen trabajos razonables con inversiones superiores a las mínimas reglamentarias, y que son las únicas solicitantes, procede otorgar a «CAMPSA», «CIEPSA» y «COPAREX» el mencionado permiso.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se otorga conjuntamente a las Sociedades «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA) en su condición de administradora del monopolio de petróleo y en representación del mismo; «Compañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, S. A.» (CIEPSA), y «Coparex Española, S. A.» (COPAREX), con participaciones respectivas del cincuenta y uno por ciento, veinticinco por ciento y veinticuatro por ciento, el permiso de investigación de hidrocarburos que a continuación, con longitudes referidas al meridiano de Madrid, se describe:

Expediente setecientos cincuenta y siete.—Permiso «Santurde», de dieciocho mil novecientas sesenta y tres hectáreas, y cuyos límites son: Norte, cuarenta y dos grados veinticinco minutos N.; Sur, cuarenta y dos grados veinte minutos N.; Este, cero grados cincuenta minutos E., y Oeste, cero grados treinta y cinco minutos E.

Artículo segundo.—El permiso de investigación a que se refiere el artículo anterior queda sujeto a todo cuanto dispone la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cuatro, al Reglamento de doce de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, en lo que no se oponga a la Ley anterior y en tanto no entre en vigor el nuevo Reglamento, así como a las ofertas de la adjudicataria que se especifican en el presente Decreto y a las condiciones siguientes:

Primera.—Las titulares, de acuerdo con su propuesta, vienen obligadas a realizar, durante los tres primeros años de vigencia, en el área que se otorga, labores de investigación con una inversión mínima de diecisiete millones quinientas mil (17.500.000) pesetas.

En el caso de continuar la investigación después del tercer año de vigencia, las titulares vienen obligadas a perforar, dentro de los tres años siguientes, en el permiso «Santurde» o en uno de sus colindantes, «Santo Domingo», «Nájera», «Navarrete», «Logroño» o «Murrillo», un sondeo profundo de investigación, con una inversión mínima que se fijará en el plan de labores correspondiente al cuarto año de vigencia del permiso.

Segunda.—En el caso de renuncia total al permiso otorgado, las titulares vendrán obligadas a justificar, a plena satisfacción de la Administración, el haber invertido en el mismo, hasta el momento de la renuncia, las cantidades mínimas señaladas en la condición primera anterior; si la cantidad justificada fuera menor, se ingresará en el Tesoro la diferencia entre ambas cantidades.

Si la renuncia fuese parcial se estará a lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y tres del Reglamento de doce de junio de mil novecientos cincuenta y nueve.

Tercera.—De acuerdo con el artículo treinta y tres del Reglamento de doce de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, las condiciones primera y segunda constituyen condiciones esenciales, cuya inobservancia lleva aparejada la caducidad del permiso.

Cuarta.—La caducidad del permiso será únicamente declarada por causas imputables a las titulares, procediéndose en tal caso de acuerdo con lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro del Reglamento de doce de junio de mil novecientos cincuenta y nueve. Caso de renuncia parcial o total serán de aplicación las prescripciones del capítulo X del propio cuerpo legal.

Artículo tercero.—Se autoriza al Ministerio de Industria para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo que en este Real Decreto se dispone.

Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Industria,
CARLOS PEREZ-BRICIO OLARIAGA

13994 REAL DECRETO 1658/1976, de 7 de junio, por el que se declara a don Rogelio Rey Lorenzo beneficiario de la Ley de Expropiación Forzosa, al propio tiempo que la utilidad pública de las instalaciones de machaqueo, lavado, clasificación de áridos y canteras de caliza sitas en Lugo, de las que es titular.

Con observancia de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo diez del Reglamento General para el Régimen de la Minería de nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, don Rogelio Rey Lorenzo ha solicitado acogerse a los beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa para la adquisición de los terrenos necesarios para la continuidad de las ins-

talaciones de machaqueo, lavado y clasificación de áridos de caliza y de canteras del mismo material, sitas en la provincia de Lugo, de las que es titular.

Tramitada la petición de acuerdo con lo prevenido en el último párrafo del mencionado artículo —de aplicación al caso en virtud de lo establecido por la disposición final primera de la Ley de Minas de veintiuno de julio de mil novecientos setenta y tres—, y en atención a reunir la industria para cuya continuidad solicita el referido beneficio las condiciones señaladas en los artículos ciento dos y ciento trece de la propia Ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día cuatro de junio de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara a don Rogelio Rey Lorenzo, titular de las canteras de caliza «Coto de Pousada» y «Recimil», beneficiario de la Ley de Expropiación Forzosa, al propio tiempo que la utilidad pública de las instalaciones de machaqueo, lavado y clasificación de áridos, de las que también resulta propietario, sitas en el lugar de la Espiñeira, Ayuntamiento de Villanueva de Lorenzana, y en el lugar de la Espiñeira, Ayuntamiento de Barreiros, así como de una nueva explotación en las zonas de «Grande Mesada», «Pedros» y «Santa Mariña», de la parroquia Santa María Mayor, término municipal de Mondoñedo, a efectos de la adquisición de los terrenos necesarios de dicha industria.

Artículo segundo.—Vendrá obligado el beneficiario de la expropiación a no paralizar los trabajos, salvo caso de fuerza mayor, por un plazo de tiempo superior a un año, a efectos de lo que dispone el artículo diez del Reglamento General para el Régimen de la Minería de nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y seis.

Dado en Madrid a siete de junio de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Industria,
CARLOS PEREZ-BRICIO OLARIAGA

13995 REAL DECRETO 1659/1976, de 7 de junio, por el que se declara urgente la ocupación de bienes afectados por la expropiación forzosa para la instalación de una línea de transporte de energía eléctrica a 132 KV. de tensión, entre el apoyo 180 de la línea Conchas-Peares y la subestación transformadora de San Ciprián de Viñas (Orense), de la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA).

La Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), ha solicitado del Ministerio de Industria la concesión de los beneficios de expropiación forzosa e imposición de servidumbre de paso y la declaración de urgente ocupación, en base a lo dispuesto en el artículo treinta y uno del Reglamento, aprobado por Decreto dos mil seiscientos diecinueve/mil novecientos sesenta y seis, de veinte de octubre, que desarrolla la Ley diez/mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, de Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de Instalaciones Eléctricas, con la finalidad de construir una línea de transporte de energía eléctrica a ciento treinta y dos KV. de tensión, entre el apoyo número ciento ochenta de la línea en funcionamiento, a la misma tensión, Conchas-Peares y la nueva subestación transformadora de San Ciprián de Viñas, en la provincia de Orense.

Declarada la utilidad pública en concreto de la citada instalación por Resolución de la Dirección General de la Energía de fecha once de junio de mil novecientos setenta y cinco, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de veintiuno de julio siguiente, se estima justificada la urgente ocupación, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso aéreo, por ser la línea que conducirá la energía eléctrica necesaria para el abastecimiento del polígono industrial de San Ciprián de Viñas, en Orense, calificado de preferente localización industrial por Decreto mil doscientos diecisiete/mil novecientos setenta y tres, de siete de junio, incluido dentro de la gran área de expansión industrial de Galicia, de cuya infraestructura forma parte esta línea y la subestación transformadora que se ha proyectado en terrenos del propio polígono.

Tramitado el correspondiente expediente por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Orense, de acuerdo con la Ley y el Reglamento citados, dentro del término hábil reglamentario del trámite de información pública a que se sometió el expediente, se presentaron diez escritos de alegaciones. De los aludidos escritos, nueve solicitan variación de trazado y subsanación de errores respecto a la calificación de sus fincas y a la afección proyectada; ambas peticiones no son atendibles, ya que el Organismo instructor del expediente, previa comprobación sobre el terreno, ha informado que no concurren conjuntamente las circunstancias prevenidas en el Reglamento para que pueda ser modificado el trazado proyectado. Con respecto a